

La consulta plantea, si pueden comunicarse los datos del padrón de habitantes al Hospital de Manises, con la finalidad de poder dimensionar los servicios, humanos y materiales para una adecuada asistencia sanitaria, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

Las comunicaciones de datos de carácter personal objeto de la consulta implican un supuesto de cesión de datos de carácter personal entre organismos públicos, regulado en el artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. Dicho precepto se ha visto afectado por la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, indicando la redacción resultante de la anulación parcial del mismo que *“los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las Administraciones Públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán comunicados a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas, salvo cuando la comunicación tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos”*.

Por este motivo, no es dable a los departamentos u órganos administrativos responsables de los ficheros determinar libremente las cesiones que de dichos ficheros se efectúen a otras Administraciones Públicas, de tal forma que dicha cesión sólo será admisible cuando cedente y cesionario desempeñen unas mismas competencias o exista una norma con rango de Ley habilitante para la cesión.

No obstante, al tratarse de datos contenidos en el Padrón Municipal de Habitantes y por tanto, de un fichero de titularidad pública responsabilidad del Ayuntamiento, debe partirse, con carácter general, del principio de finalidad del Padrón previsto en la propia normativa de régimen local que, tal y como dispone el artículo 16.1 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, es la de servir de registro administrativo donde consten los datos referidos a los vecinos del Municipio, constituyendo prueba de la residencia en el Municipio y el domicilio habitual.

De ello se desprende que, el uso que la corporación haga de los datos contenidos en el padrón, incluidas las autorizaciones para poder acceder a su consulta, deberá circunscribirse a las funciones relacionadas estrictamente con las indicadas por la Ley. Cualquier otra utilización de los datos para un fin distinto supondrá una cesión o comunicación de los mismos que, tras lo establecido en la citada Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, deberá contar con el consentimiento del afectado o encontrar

cobertura en alguna de las excepciones contenidas en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 15/1999, entre las que debe reseñarse, a los efectos del presente informe, la posibilidad de que exista una norma con rango de Ley habilitadora de la cesión.

Como regla interpretativa de lo hasta aquí enunciado, el artículo 16.3 de la propia Ley de Bases de Régimen Local redactado conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, establece que *“los datos del Padrón municipal se cederán a otras Administraciones Públicas que lo soliciten sin consentimiento previo del afectado solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. También pueden servir para elaborar estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico, en los términos previstos en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública y en las leyes de estadística de las comunidades autónomas con competencia en la materia”*.

Fuera de estos supuestos, los datos del Padrón son confidenciales (artículo 53 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio que regula el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales) y su acceso se rige por la Ley 15/1999 y por la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Agencia Española de Protección de Datos ha considerado que la expresión «datos del Padrón municipal» que se emplea en el artículo 16.3 de la LBRL se refiere únicamente a los datos que en sentido propio sirven para atender a la finalidad a que se destina el Padrón municipal: la determinación del domicilio o residencia habitual de los ciudadanos, la atribución de la condición de vecino, la determinación de la población del municipio y la acreditación de la residencia y domicilio. Por ello, cualquier comunicación o cesión de los datos del Padrón deberá fundarse en la necesidad por la Administración cesionaria, en el ejercicio de sus competencias, de conocer el dato del domicilio de la persona afectada, dado que del artículo 4.2 de la Ley se deriva la imposibilidad del tratamiento de los datos para fines diferentes de los que motivaron su recogida, salvo que así lo consienta el afectado o la Ley lo prescriba.

Aplicando este criterio, la cuestión del uso legítimo de los datos del Padrón municipal por las Administraciones públicas (incluidas las Entidades Locales) vendrá determinada en cada caso por el cumplimiento de ambas premisas, siendo por ello determinante la consideración del desarrollo de competencias efectivamente atribuidas a cada una de ellas, de acuerdo con el principio administrativo de competencia establecido en el artículo 12 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por lo que debe analizarse cada uno de los supuestos concretos planteados.

Por tanto entendemos que la comunicación de todos los datos solicitados por el hospital, no puede ampararse en el artículo 16.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, dado que el domicilio y residencia no son absolutamente relevantes para poder evaluar las necesidades del servicio hospitalario.

En virtud, de lo señalado hasta ahora, no podemos sino señalar que la comunicación de datos solicitada por el hospital, cuya finalidad es poder dimensionar mejor los servicios, tanto materiales como humanos, no requiere conocer el concreto nombre, apellido, DNI y domicilio de los ciudadanos, pues para valorar de la necesidad de aumentar o disminuir los servicios sanitarios, sólo se necesita de disponer de una información disgregada, y anonimizada de los datos contenidos en el padrón.